



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Proceso:                            | Ordinario Laboral                                     |
| Radicación:                         | 05001-31-05-004(024)-2019-00244-01                    |
| Demandante:                         | Miryam del Socorro Agudelo Vargas                     |
| Demandado:                          | Colpensiones y Porvenir S.A.                          |
| Litisconsorte Necesario por Pasiva: | Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público     |
| Asunto:                             | Apelación y Consulta                                  |
| Procedencia:                        | Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín |
| Magistrada ponente:                 | Sandra María Rojas Manrique                           |
| Temas:                              | Ineficacia afiliación al RAIS                         |

**Medellín, enero treinta y uno (31) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por los señores apoderados de Porvenir S.A. y de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como el grado jurisdiccional de Consulta, en favor de Colpensiones, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 16 de noviembre del año 2022, en el

proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora MIRYAM DEL SOCORRO AGUDELO VARGAS en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., proceso al cual fue vinculado como LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Radicado 05001-31-05-004(024)-2019-00244-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora MIRYAM DEL SOCORRO AGUDELO VARGAS, convocó a juicio a COLPENSIONES y PORVENIR S.A., pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, ordenando la reactivación en el Régimen de Prima Media y el traslado del saldo de la cuenta a Colpensiones, con sus rendimientos, frutos e intereses.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que la demandante nació el 8 de abril de 1953, explicando que, en febrero de 1998, se trasladó a Porvenir S.A., porque uno de los asesores le manifestó que con ellos se pensionaría antes de la edad requerida y con una mesada superior, sin explicarle requisitos y condiciones.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la fecha de nacimiento de la actora,

sin constarle los demás hechos de la demanda, por ser ajenos a su representada.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; prescripción; imposibilidad de condena en costas; buena fe y la innominada.

Por su parte, **PORVENIR S.A.**, replicó la demanda, indicando que los asesores de la entidad, son instruidos para suministrar toda la información necesaria para que el potencial afiliado tome una decisión informada, por lo que resulta inverosímil considerar que la accionante no hubiere contado con la información oportuna, completa, clara, suficiente y veraz, respecto de las características de los regímenes.

En su defensa formuló las excepciones de falta de integración del contradictorio; prescripción; falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas; buena fe; prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo; enriquecimiento sin causa y la innominada o genérica.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 16 de noviembre del año 2022, el Juzgado de conocimiento declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por la actora en el año de 1998 a Porvenir S.A.; condenó a Porvenir S.A., que en el término improrrogable de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la providencia, traslade a Colpensiones todos los saldos de la cuenta de ahorro individual de la reclamante, con los rendimientos financieros, el bono pensional que fue emitido y redimido mediante Resolución No. 11060 del 27 de mayo de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que se encuentra en la cuenta de ahorro individual, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, con cargo a sus

propios recursos, monto que deberá pagarse indexado; ordenó a Colpensiones, reactivar de manera inmediata la afiliación de la demandante y recibir la devolución de los dineros.

#### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

##### **Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

El apoderado de la cartera ministerial interpuso recurso de apelación, en cuanto a la orden dada a la AFP de trasladar el bono pensional, ello por cuanto como se está declarando la ineficacia de la afiliación, todo se retrotrae al momento previo al traslado, por lo que el bono pensional tipo A que fue emitido, al ser compatible solo en el Régimen de Ahorro Individual, lo procedente sería declararlo nulo y devolverlo a la Nación, debiéndose tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1748 de 1995 artículo 1° concordado con el artículo 57 de la misma norma, haciéndose necesario devolver el bono a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera indexada desde la fecha en que se pagó hasta la fecha en que se realice el reintegro, citando como sustento la sentencia SL 4593 del 2020.

##### **Porvenir S.A.**

La apoderada de la administradora interpuso el recurso de apelación frente a la providencia de primera instancia, indicando que, en cuanto a la indexación, la misma es improcedente, tal y como se indicó en la sentencia C 161 del 2010 y SL 9316 del 2016, explicando que dentro de las obligaciones que debe cumplir su representada, es la de garantizar la rentabilidad mínima de la cuenta de ahorro individual de cada uno de sus afiliados, resultando incompatible ordenar la indexación, por cuanto los recursos de la accionante no se vieron afectados por la inflación y generaron rendimientos.

Agregó que teniendo en cuenta que se ordena la devolución de los rendimientos financieros, rubro que incluye los frutos e intereses que se obtuvieron por los dineros recibidos por la actora, este concepto resulta excluyente respecto de la indexación, citando providencias del Tribunal Superior de Cali, en este sentido.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de la demandante y de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El apoderado de la hoy reclamante solicita se confirme la providencia de primera instancia, teniendo en cuenta para ello los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema de las ineficacias de la afiliación.

Por su parte, el apoderado de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reitera los argumentos esgrimidos al momento de presentar el recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia, solicitando se adicione la providencia en el sentido de indicar que Porvenir S.A. debe reintegrar a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los valores reconocidos por concepto de bono pensional tipo A, de manera indexada.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el

artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que la señora Miryam del Socorro Agudelo Vargas nació el 8 de abril de 1953, tal y como se desprende de la copia del registro de nacimiento y de la cédula de ciudadanía obrantes en el documento 02 folios 58 a 60 del plenario.
- Que la demandante se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Porvenir S.A., el 23 de febrero de 1998, con fecha de efectividad el 1º de abril de 1998, información que se extrae del formulario de afiliación y del certificado del SIAFP, obrantes en el documento 02 folio 16 del plenario y documento 17 folio 24 del plenario.
- Que la accionante acredita un total de 1161 semanas cotizadas, conforme a la historia laboral expedida por Porvenir S.A., el 20 de abril del 2017, obrante en el documento 02 folios 48 a 53 del plenario.

## **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y de consulta, proferida en el presente proceso por la señora Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, determinando si es ineficaz el traslado efectuado por la demandante, el 1° de abril de 1998, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a través de la AFP Porvenir S.A.?

¿Es procedente ordenar la indexación de los dineros que, por concepto de comisiones de administración, cuotas de seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía Mínima, debe reintegrar Porvenir S.A. a Colpensiones?

¿Si es viable declarar la nulidad del bono pensional de la actora, que fue emitido y redimido por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando a la AFP, reintegrar el mismo a la entidad territorial, ¿de manera indexada?

## **2.4.- TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) es ineficaz el acto de traslado por incumplimiento del deber de información, (ii) como consecuencia de la declaratoria de ineficacia, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, (iii) resulta procedente ordenarse la anulación del bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiendo a Porvenir S.A., devolver el dinero actualizado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo recibido por dicha entidad, a título de bono pensional tipo A., en consecuencia, la sentencia debe ser MODIFICADA en el numeral segundo y CONFIRMADA en lo demás.

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado. (artículo 12)

El Régimen de Prima Media con Prestación Definida está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, establece como característica del sistema general de Pensiones, la libertad de selección de régimen en los siguientes términos *“la selección de uno cualquiera de*



*los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”.*

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”* (subraya de la Sala)

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, decreto 663 de 1993, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la ley 1328 de 2009, el decreto reglamentario 2555 de 2010, la ley 1748 de 2014, el decreto 2071 de 2015 y la circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras pensionales, como condición de eficacia del traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021 y más recientemente en las sentencias SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022 y SL1637 del 11 de mayo de 2022, entre muchas otras.

De acuerdo con la ratio decidendi de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la

prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso concreto, se establece el traslado de régimen pensional de la señora Miryam del Socorro Agudelo Vargas, a través de la AFP Porvenir S.A., el 23 de febrero de 1998, con fecha de efectividad el 1º de abril de 1998, información que se extrae del formulario de afiliación y del certificado del SIAFP, obrantes en el documento 02 folio 16 del plenario y documento 17 folio 24 del plenario, no obstante, el formulario de afiliación no da cuenta de la información que fue brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se suple con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); por ello no puede inferirse la voluntariedad del traslado en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Del interrogatorio de parte practicado a la demandante, no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó, que cuando realizó el traslado a Porvenir S.A., no recibió ningún tipo de información ni asesoría, ello por cuanto del área de talento humano de la Universidad de Antioquia, en donde laboraba para esa época, le dijeron que se debían pasar a las AFP porque el ISS se iba a acabar, le enviaron el formulario, ella lo diligenció y lo firmó, pero no tuvo comunicación con un asesor de la administradora, encargándose su empleador, de radicar el formulario.

De igual forma se recibieron las declaraciones de las señoras Sonia del Pilar Agudelo López y Ángela Yulema García Anduquia, compañeras de trabajo de la accionante, quienes coincidieron en afirmar que en la Universidad les dijeron

que se tenían que pasar a los fondos, sin recibir asesoría por parte de un asesor de la AFP.

Aunado a lo anterior, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que en su momento Porvenir S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado.

En este escenario probatorio, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó Porvenir S.A. a la demandante, al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, teniendo en cuenta, además, que ni siquiera fue visitada por un asesor de la administradora, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de la afiliación, precisando que no puede declararse la imposibilidad de traslado de la accionante atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, en tanto que, el retorno de la misma al Régimen de Prima Media, se da como consecuencia de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

### **Sobre los efectos de la ineficacia**

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

No puede afectarse, además, el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con la disminución de la cotización en favor de la administradora accionada, teniendo en cuenta, que fue Porvenir S.A., quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos generados, mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones, conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al Fondo de Garantía Mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, deben ser trasladados conforme al artículo 7 del decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

Ahora, en cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 del 29 de julio de 2020, indicando:

*“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”*

*De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.*

*En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Similar postura se sostuvo en la sentencia SL 3034 de 2021:

*“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando*

*el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.*

### **Sobre la indexación**

Atendiendo al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la AFP demandada, por la condena impuesta a indexar los conceptos a trasladar, señala la Sala que la misma resulta procedente tal como lo ha adocinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, toda vez que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca que Colpensiones reciba la cotización completa para no afectar su estabilidad financiera.

Colofón de lo anterior, la orden de traslado impartida por la falladora primaria, se encuentra ajustada a los anteriores criterios.

### ***Sobre el bono pensional***

Fue aportada la Resolución No. 2106 del 11 de mayo del 2004, expedida por el Ministerio de Hacienda, por medio de la cual se emitió el cupón principal a cargo de la Nación en el bono pensional de la actora, como afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, apareciendo como valor a la fecha de emisión \$14.881.000, la fecha de traslado lo fue el 1º de abril de 1998, el valor a la fecha del traslado \$7.169.000, la fecha de redención lo fue el 13 de abril del

2022 y la fecha de emisión el 4 de mayo del 2010 -ver documento 34. Exp. Digital folios 29 a 68-.

Así mismo obra Resolución No. 10848 del 22 de abril del 2013, expedida por el Ministerio de Hacienda, por la cual se reliquida el bono pensional tipo A a cargo de la Nación, apareciendo como fecha de emisión el 10 de mayo del 2004 y como valor a la emisión de \$14.881.000 -ver documento 34. Exp. Digital folios 73 a 75-.

Así las cosas, le asiste razón al apoderado de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su raciocinio, al indicar que se debe ordenar la anulación del bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo Porvenir S.A., debe devolver el dinero actualizado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo recibido por dicha entidad, a título de bono pensional tipo A, por lo que se habrá de modificar el numeral segundo de la providencia.

Lo anterior atiende al lineamiento establecido en el parágrafo 1 del artículo 2.2.16.7.17 del Decreto 790 de 2021, que modifica el Decreto 1833 de 2016, que a su vez compiló entre otros, los Decretos 1748 de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998, 510 y 3798 de 2003, 3995 de 2008, 4937 de 2009 y 1051 de 2014, así:

*“PARÁGRAFO 1. Las entidades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán reintegrar a la entidad pagadora que corresponda, el valor pagado por el bono pensional actualizado de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.16.1.9 y 2.2.16.1.11 de este Decreto. Así, tratándose de bonos anulados, en los que se requiera realizar el reintegro de los valores pagados, se seguirá el siguiente procedimiento: al momento de realizar el reintegro, la Administradora de Pensiones deberá determinar el valor del bono pagado inicialmente y el valor de los rendimientos obtenidos por este desde el momento en el que fue girado a la Administradora de Fondos de Pensiones por parte de la Nación. (subraya de la Sala)*



Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

### **3.- DECISIÓN**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral de Circuito de Medellín, el 16 de noviembre de 2022, en el proceso ordinario instaurado por la señora MIRYAM DEL SOCORRO AGUDELO VARGAS en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., proceso al cual fue vinculado como LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en el sentido de ordenar la anulación del bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, requiriendo a Porvenir S.A., para que devuelva el dinero actualizado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo recibido por dicha entidad, a título de bono pensional tipo A.

2.- Se **CONFIRMA** en lo demás la sentencia de primera instancia.

3.- Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

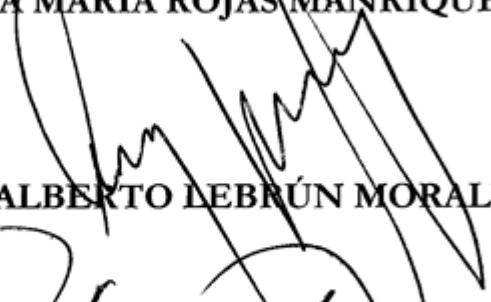
4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

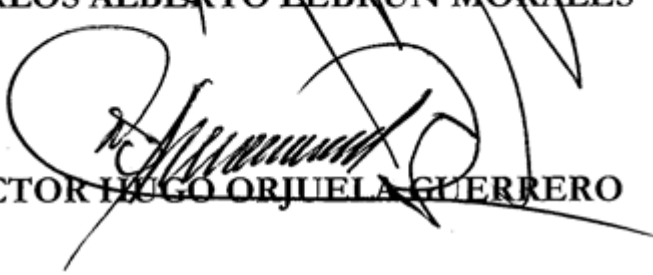
Los Magistrados,



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**